

El gobierno impulsa la elaboración de la Ley de Seguridad alimentaria

El gobierno boliviano impulsa la elaboración de una propuesta de Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria, como una forma concreta de reducir la pobreza y lograr el “ Vivir Bien”. El Comité Nacional de Seguridad Alimentaria, integrada por organizaciones sociales y técnicos del gobierno, están encargados de elaborar esta propuesta.



Asumiendo que la pobreza y el grave problema alimentario en Bolivia exige grandes desafíos, la seguridad alimentaria, debe ser entendida, como un ciclo interactivo de producción, distribución y consumo, orientado a satisfacer en cantidad y calidad las demandas alimentarias de un entorno humano caracterizado por una amplia diversidad cultural y social. Estos grandes desafíos suponen la formulación y aplicación de políticas públicas en las dimensiones productivas, distributivas, económicas, sociales, educativas, territoriales, de salud y prevención de desastres entre otros, que descansan

en la responsabilidad de los poderes del Estado, en beneficio la sociedad en su conjunto.

En tal sentido, la Seguridad Alimentaria en un entorno global dual de exigencias liberalizadoras e imperialistas por parte de los países industrialmente desarrollados y las empresas transnacionales, se torna en un concepto político, asentado en la autodeterminación de los pueblos indígenas y originarios que vienen proponiendo un tratamiento “Soberano” de la seguridad alimentaria. Tal soberanía alimentaria debe ser entendida como un sistema autónomo de toma de decisiones que garantice la protección del aparato productivo nacional y sus sistemas de distribución y acceso, que genere condiciones políticas en cuanto a la equidad en la tenencia de tierra, las relaciones de género e incentive los sistemas de producción propios de la multiculturalidad, que vienen atendiendo sustantivamente la seguridad alimentaria del país desde tiempos inmemoriales. En otras palabras, la Seguridad Alimentaria con Soberanía debe ser comprendida como un bien común, un derecho humano y el elemento fundamental para la construcción de la calidad de vida; y no un negocio como es concebida por la sociedad de consumo.

Según el Quinto informe de Progreso de los Objetivos y Metas del desarrollo del Milenio de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (Udape), de julio de 2008, el porcentaje de personas en extrema pobreza fue del 37,7 %, significando que cerca de 3.8 millones de bolivianos

pasan hambre al no cubrir los costos de una canasta básica de alimentos.

Más aún, un estudio del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) estima que el 16 % de la población total de Bolivia se concentra en las 7.718 organizaciones comunitarias más vulnerables a la inseguridad alimentaria; 30.4% de la población boliviana, excluyendo las ciudades capitales y El Alto, viven en comunidades vulnerables y extremadamente pobres. A nivel departamental se revela que en Chuquisaca y Potosí, 8 de cada 10 de las comunidades son vulnerables; Oruro, Cochabamba y La Paz tienen alrededor del 50% de sus comunidades en los grupos de vulnerabilidad más alta. Este estudio sigue y da cuenta que las características de estas comunidades es que están dispersas y no cuentan con caminos; el flujo del comercio es reducido; el 36% de la población masculina y el 57% de la femenina es analfabeta. Sólo el 3% de las madres recurrieron a un centro de salud para la atención de su último parto; el 82% de su población no tiene acceso a agua potable y el 100 % no cuenta con alcantarillado. Características que revelan la situación de pobreza en la que viven.

Pero posteriormente, este mismo programa difundió otros datos. El Estudio Diagnóstico, Modelos y Atlas de Seguridad Alimentaria en Bolivia reveló que el índice de vulnerabilidad en los municipios mejoró. En el 2003 el 53% de los municipios (de 314 en total) tenía niveles altos y muy altos de inseguridad alimentaria. En el año 2007, el porcentaje habría disminuido a 44 % (sobre 327 municipios). En la elaboración de este estudio también participaron la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE), bajo la coordinación del Ministerio de Planificación.

A ese estudio se suma que una de cada tres personas a nivel nacional y cinco en el área rural no pueden acceder a la canasta básica alimentaria, según el Programa mundial de Alimentos (PMA)

88% de la población que habita las comunidades vulnerables a la inseguridad alimentaria tiene origen indígena. Este dato fue revelado por el estudio Resultados de la

Encuesta de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Municipios Vulnerables de Bolivia, presentado por el PMA en el 2006 junto a instituciones de gobierno y otros organismos de cooperación.

Frente a ello el gobierno del presidente, Evo Morales, impulsa la política de seguridad alimentaria dirigida a reducir dichos índices de desnutrición, a través de el incremento y la cualificación de la producción de alimentos, según declaraciones del Viceministro de Desarrollo Rural, Víctor Hugo Vásquez.

En ese marco se realizó el Primer Congreso de "Seguridad Alimentaria", cuyas conclusiones están dirigidas a promover la producción de alimentos y el compromiso de la población en la lucha contra la desnutrición.

En la primera gestión gubernamental del MAS, se impulsó la producción de alimentos y se introdujo la mecanización del agro con la entrega de tractores.

El apoyo a la producción de alimentos se desarrolla a través de EMAPA (Empresa de Apoyo de la Producción de Alimentos) que financia semillas y agroquímicos facilitando la comercialización de la producción a medianos y pequeños productores de 43 municipios en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, Beni, Chuquisaca, Tarija y Potosí. Se trata de los municipios afectados durante el 2007 y 2008 por los fenómenos climáticos El Niño y La Niña, según el gerente de esta empresa Álvaro Rodríguez.

Estos productores en su conjunto recibieron 288 millones de bolivianos, destinados a financiar la producción de arroz, trigo, maíz y soya. Por otra parte, también se apoyó 41 proyectos productivos en convenio con organizaciones sociales que trabajan en la crianza de animales y plantaciones agrícolas.

Asimismo, el gobierno trabaja en la implementación y funcionamiento de empresas como Lacteosbol, la empresa de lácteos dependiente del Estado y que en un inicio elaborara yogurt y queso. Estos productos

estarán destinados al desayuno escolar y al subsidio de lactancia de la ciudad de Cochabamba y diferentes áreas del altiplano. En el subsidio de lactancia serán beneficiadas 30 mil madres, según la Ministra de Desarrollo Productivo, Antonia Rodríguez.

A pesar de estas acciones hay tareas pendientes, una de ellas es la capacitación de productores en el manejo genético de las semillas y brindar mayor acceso a los créditos productivos, según el viceministro Vásquez.

A estas acciones también se suma la promesa del PMA que adelanta la implementación para el 2011 de un Proyecto en Seguridad Alimentaria de 12 millones de dólares para apoyar a las familias que recurrentemente fueron afectadas por los desastres naturales.

La desnutrición contribuye anualmente al fallecimiento de casi 6 millones de niñas y de niños pequeños.



En Bolivia, se estima que 615,000 niños y niñas menores de 13 años se van a la cama sin comer.